

CONCLUSIONES DEL FORO CIUDADANO "EL NUEVO TRABAJO"

En el marco de la iniciativa de Periodismo Cívico, desarrollada por La Voz del Interior, Canal 12, Cadena 3, Perspectivas Sociales, Conciencia y El Ágora, el pasado Sábado 14 de Diciembre se llevó a cabo en la sede integral de La Voz del interior, el Foro Ciudadano "El Nuevo Trabajo" – Políticas municipales para fomentar el empleo.

Los Foros Ciudadanos son espacios abiertos y horizontales de deliberación ciudadana sobre propuestas de políticas públicas desarrolladas a partir de investigaciones sociales y de los aportes de especialistas en la materia.

En el Foro participaron ciudadanos cordobeses de distintas edades, segmentos sociales, barrios, etc. y los concejales Taquela (del Bloque Partido Socialista – Frente Grande), Taranto (UCR) y Stabio (Bloque Vecinalista). De los bloques justicialista fueron invitados la concejal Del Bo, Possi, Arias y Altamirano, y por la UCD, los concejales De Allende y Balevela; ninguno de los cuales pudo asistir.

La mecánica de trabajo consistió en una primera etapa de deliberación en nueve grupos en función de la Guía de Trabajo y posteriormente, en una Ronda de Acuerdos, en la que voceros de cada grupo y los concejales presentes dialogaron en función de las opciones elegidas. Se concluyó con una instancia de votación entre todos los participantes para definir las políticas consideradas más adecuadas de cada uno de los tres ejes propuestos; y con la firma de un Acta de Compromiso Público.

ASPECTOS SOBRESALIENTES DE LAS DELIBERACIONES

LO URGENTE VS. LO IMPORTANTE EN EL LARGO PLAZO

Las deliberaciones sobre los distintos ejes y en los distintos grupos, parecieran haber estado atravesadas por una fuerte tensión entre dos fuerzas: la de la resolución de las cuestiones urgentes y la de la generación de medidas con impacto en el largo plazo.

Dentro de la primera de estas fuerzas se encuentra la conciencia de la necesidad apremiante de dar respuesta a los cada vez más numerosos grupos de excluidos, a la marginalidad, al hambre. Y de esta conciencia se desprende la tolerancia a cuestiones que son consideradas negativas, pero que se justifican en este contexto de crisis, tales como los subsidios a

los grupos vulnerables y sin recursos, la precarización en las condiciones del trabajo, el incremento de la burocracia municipal, etc.

La segunda fuerza se caracteriza por la consideración de que son necesarias medidas con impacto en el largo plazo, sustentables, que apunten a la generación de puestos de trabajo genuinos, a la dignificación de las personas, a la creación de una nueva cultura de trabajo, a la necesidad de planificación que comprenda la no -superposición de programas y esferas de gobierno, a la asistencia y tutelaje a los beneficiarios, etc. En términos prácticos, esta fuerza tiende a inclinar las elecciones hacia la promoción de sectores económicos considerados de arrastre (pymes, microemprendimientos, industria de la construcción), a la promoción de la educación (en términos de capacitación en función de la demanda, de instrucción sobre derechos laborales, etc.), al incremento en la presencia de sectores que mantienen aún una alta credibilidad (ONGs, U.N.C., etc.).

Las dificultades para resolver la tensión entre estas dos fuerzas se relacionan principalmente con la creencia de que en este contexto económico altamente recesivo, es previsible el fracaso de muchas de las medidas de largo plazo.

LAS DISTINTAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LAS FUNCIONES DE LA MUNICIPALIDAD

Otro elemento que estuvo presente en todos los grupos, tiene que ver con una cuestión de fondo en la búsqueda de soluciones a escala local al problema de la desocupación. En algunos grupos, o sobre algunas de las propuestas, los intercambios de opiniones se centraron en cuáles son y cuáles no son, funciones o terrenos de intervención municipal legalmente permitidos, viables, etc.

Así se plantearon por un lado las posibilidades de que desde el Estado Municipal se encaren medidas de redistribución de la riqueza en función de lo recaudado impositivamente y de reordenamiento fiscal. Por otra parte, para otros participantes la función de la Municipalidad debería seguir reducida al aprovisionamiento de servicios públicos.

LA CORRUPCIÓN COMO DESALENTADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS

La desconfianza hacia el Estado y los modos en que se han llevado y llevan a cabo las implementaciones de distintos programas estatales, condujo a que una buena parte del tiempo destinado a las deliberaciones fuera usado para discutir sobre la necesidad de implementar mecanismos de control eficientes, que prevengan los costos excesivos, las prácticas

clientelares y partidistas y que monitoreen los procesos y evalúen los resultados.

Además, prácticamente todas las propuestas presentadas fueron miradas con un fuerte escepticismo y total desconfianza, lo que por momentos, truncaba las posibilidades de encontrar mecanismos de implementación que garantizaran la transparencia y la llegada de los recursos eficientemente a los grupos beneficiarios. La particularidad de este hecho se encuentra en que los participantes acordaban en que el Estado debe dar respuesta a los problemas de la desocupación.

Los participantes sugirieron distintas instituciones, a las que consideran confiables, para que encaren esas tareas, tales como las universidades, los colegios profesionales y algunas ONGs.

Por último, reclamaron la necesidad de que las políticas implementadas exitosamente se sostengan en el tiempo, más allá de los recambios institucionales que ocurrieren.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS DESOCUPADOS

La propuesta que mayor adhesión despertó, tanto en el trabajo en los grupos como en la Ronda de Acuerdos final, fue la de "Transferencia de ingresos a sectores de población con calificaciones o recursos", consistente en la implementación de una tasa de interés bonificada para el otorgamiento de créditos a Pymes.

La principal razón por la que los participantes rescataron esta alternativa es por considerar, teniendo en cuenta la experiencia internacional, que el desarrollo de pymes dinamiza el mercado y reactiva la economía de modo sustentable. Las pymes tienen un rol fundamental en la generación de empleo genuino y en blanco, lo que se traduce en un incremento de la recaudación fiscal.

Por otra parte, este programa es elegido porque se minimiza el clientelismo y la corrupción al acotar la función del gobierno y al ser las pymes las que definen el destino de los fondos. Con respecto a los mecanismos de control del programa se insistió en que sean ONGs y universidades las que seleccionen a las pymes beneficiarias.

En los grupos sugirieron algunas mejoras a la propuesta presentada, por ejemplo, que debería incluirse como criterio de selección sólo a aquellas pymes que utilicen recursos humanos y materiales locales y que se implemente un sistema que realce los méritos de cada pyme bonificando con desgravaciones impositivas aquellas que incorporen nuevos empleados. Además, consideraron necesario que se brinde asesoramiento

sobre las mejores maneras de utilizar los recursos y que el Estado desarrolle leyes que favorezcan el desarrollo de este sector.

Quienes no estuvieron de acuerdo con este programa manifestaron que en este contexto recesivo, difícilmente los resultados sean exitosos. Otros consideraron que el dinero otorgado no va a ser usado para incrementar la producción y el número de contratados, sino que va a canalizarse hacia el pago de deudas.

Otros participantes creyeron que la mejor opción era la transferencia de recursos a los grupos vulnerables sin recursos ni calificación, porque es una medida rápida y eficiente para combatir las urgencias y la creciente exclusión social y porque afecta a una mayor cantidad de personas.

Por el contrario, sus críticos plantearon que esta alternativa constituye un parche en el corto plazo, que retrasa la búsqueda de soluciones estructurales. Además, sostuvieron que el otorgamiento de subsidios es un modo de promover la vagancia, y atentar contra la generación de una nueva y necesaria cultura del trabajo.

Hubo coincidencias entre los defensores y detractores de este programa en calificarlo como muy riesgoso por presentar altas posibilidades de corrupción a través de prácticas clientelares. A partir de esto, en prácticamente todos los grupos se enfatizó la necesidad de crear fuertes mecanismos de control.

La propuesta de creación de una oficina municipal de intermediación laboral contó con muy pocos adherentes principalmente porque se considera que es poco útil en una situación recesiva en la demanda de mano de obra y porque se desconfía del modo en el que el poder ejecutivo municipal pueda llevarla a la práctica (se la considera como la propuesta que más se presta a malos manejos de las planteadas dentro de este eje) y se repudia el crecimiento burocrático municipal. Además, algunos consideraron que este tipo de propuestas son viables en países donde el desempleo es temporal y acotado.

Quienes la consideraron una alternativa positiva, destacaron que permitiría que aquellas personas que no pueden afrontar los costos de una consultora privada, podrían beneficiarse, que el trámite de búsqueda de empleo se abarataría y simplificaría porque uno tendría que presentar una sola carpeta y en un único lugar. Destacaron que para que sea posible, debería garantizarse la transparencia y la atención personalizada a través de un estricto control ciudadano.

PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS DESOCUPADOS

Dentro de este marco, la Guía de Trabajo planteaba tres alternativas: Capacitación a jóvenes sin experiencia laboral, capacitación para desocupados adultos y entrenamiento a adultos empleados.

Rápidamente las deliberaciones en los grupos se concentraron en las dos primeras alternativas, prácticamente sin contemplar siquiera la tercera opción por considerarla un lujo en un momento con tasas de desocupación tan elevadas. Así mismo, consideraron que de implementarse este programa deberían ser las empresas las que afronten sus costos y no el Estado.

Tanto en los grupos como en la Ronda de Acuerdos final, la elección entre capacitar a adultos o a jóvenes desempleados fue reñida; primando por votación mayoritaria la capacitación a jóvenes sin experiencia laboral.

Para defender cualquiera de estas dos iniciativas en muchos casos se usaron los mismos argumentos, principalmente vinculados con la importancia de dar herramientas – capacitación – a los desempleados para incrementar así sus posibilidades de insertarse por primera vez o de reinsertarse en el mercado laboral.

Otras ventajas destacadas para las dos propuestas fueron: la definición de la capacitación en función de las demandas concretas empresariales, la creencia de que una sociedad capacitada es una sociedad más justa y que a la larga la capacitación genera más puestos de trabajo.

Así mismo, hubo coincidencias en criticar al piso de remuneración baja que precariza el mercado de trabajo, subsidia el subempleo, boicotea los derechos laborales, no incentiva el empleo y facilitan la explotación.

Que la elección se inclinara hacia un grupo etéreo o hacia el otro, tuvo que ver con creencias personales sobre el nivel de vulnerabilidad y de logros que la capacitación conlleva en cada grupo.

Quienes optaron por los jóvenes argumentaron que son el futuro, capital humano con proyección en el tiempo, capaces de construir un futuro mejor para todos. Puede que la capacitación sea el único medio que tiene este grupo para integrarse a la fuerza de trabajo. Históricamente y en la actualidad los jóvenes tienen grandes dificultades para que conseguir empleo una vez terminado el secundario.

En tanto que quienes se inclinaron por los adultos lo hicieron por considerar que tiene un impacto social más alto al favorecer

indirectamente a la familia completa del adulto desempleado y que tienen más dificultades que los jóvenes para aprender y son los más atrasados en el manejo tecnológico.

PROGRAMAS DE GENERACIÓN O PROMOCIÓN DE EMPLEO

La propuesta que mayor adhesión despertó, tanto en el trabajo en los grupos como en la Ronda de Acuerdos final, fue la de “apoyo al desarrollo de microemprendimientos”.

La propuesta de fomento al empleo privado, a través de subsidios a pymes para que contraten nuevos trabajadores, no contó con mucha adhesión, principalmente porque las pymes ya habían sido seleccionadas para ser favorecidas en otro programa.

Esta iniciativa fue criticada por los altos riesgos de corrupción que presenta, porque implica fijar un piso bajo de remuneración precarizando las condiciones del mercado de trabajo. En tanto que se rescataron la articulación de capacitación, empleo y remuneración en un mismo proyecto.

La creación directa de empleos públicos fue valorizada en tanto provocaría un incremento en el movimiento económico en la ciudad, disminuiría temporariamente la marginalidad, y el producto de esos trabajos se traduciría en beneficios para el resto de la población por las mejoras realizadas en instituciones públicas. Sin embargo, fue rechazada por el alto riesgo de corrupción y clientelismo en los manejos, porque obligaría a los contribuyentes a pagar nuevamente por servicios que fueron adjudicados a empresas privadas, sería sólo útil en el corto plazo no atacando el problema del desempleo en toda su magnitud, ni promoviendo cambios en la cultura del trabajo.

El apoyo a los microemprendimientos fue la propuesta que más atractiva le resultó a los participantes del foro porque promueve el desarrollo sustentable, la creación de empleo genuino, la dignificación de los beneficiarios, el fomento del espíritu emprendedor y de una nueva cultura de trabajo. Además resaltaron que esta alternativa incorpora una lógica empresarial partiendo de investigaciones para determinar los posibles nichos de mercado y articulando asistencia crediticia, técnica y capacitación.

Los participantes propusieron algunas modificaciones a lo establecido en la Guía de Trabajo como que se refuercen los microemprendimientos existentes y la incorporación de las universidades, los colegios profesionales y asociaciones de la sociedad civil de reconocida trayectoria para administrar y controlar el programa.

Paralelamente, fue vista con escepticismo al considerar que los productos de los microemprendimientos no pueden competir en precio con los de las grandes empresas y sus pocas probabilidades de éxito en una economía deprimida.

La iniciativa de construcción de viviendas económicas a través de la conformación de cooperativas de desempleados sin vivienda fue la elegida en segundo término en la votación realizada entre todos los participantes del Foro Ciudadano.

Las razones que hicieron que algunos participantes se inclinaran por esta opción tienen que ver con la creencia de que la industria de la construcción, tanto en Argentina como en el mundo, se encuentra dentro de las industrias que mayor arrastre ejerce sobre los otros sectores de la economía. Además, y en relación con los beneficiarios de este programa, se consideró que si bien la obtención de vivienda propia, no combate a la pobreza, un desocupado con vivienda se encuentra más estimulado para buscar alternativas para su subsistencia.

Sin embargo, para otro grupo de participantes los costos de este proyecto son muy altos, constituyéndose en un peso excesivo para los contribuyentes y que difícilmente pueda ser llevado a cabo desde el ámbito municipal. Así mismo, rechazaron esta propuesta por considerar la dificultades que existen en conformar pequeñas cooperativas, la disolución de las mismas una vez finalizada la vivienda.

La propuesta de empresas sociales no parece haber sido totalmente comprendida por los participantes, por lo tanto, las razones que se esgrimieron a su favor o en contra no necesariamente tienen que ver con este tipo de empresas. Muchos participantes, incluso, pensaron que la propuesta consistía en monetarizar la solidaridad y el compromiso social.